AGENDA POLÍTICA PÚBLICA DE LA MUJER EN COLOMBIA

FUNDAMENTO DE LA AGENDA LABORAL DE LAS MUJERES EN LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES "CUT"

Contenido

LA POLITICA PÚBLICA DE LA MUJER EN COLOMBIA 4
FUNDAMENTO DE LA AGENDA LABORAL DE LAS MUJERES EN LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT 4
¿Qué es la política pública Nacional de equidad de género para las Mujeres? 4
Antecedentes en Colombia: 5
¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo –PND? 7
Línea del Tiempo del Plan nacional de Desarrollo: 7
¿Qué Contiene? 10
Marco Normativo del Plan Nacional de Desarrollo 10
Principios de la Política Pública Nacional de Equidad de Género 11
Lineamientos 13
Ejes articuladores de la Política 14
Objetivos Generales de la Política Pública para la Mujer: 14
Objetivos Específicos: 15
Estrategias 16
Leyes en favor de las mujeres 16
Nivel Nacional 16
Nivel Internacional 19
COMENTARIOS A LA POLITICA PÚBLICA 24

INTRODUCCIóN

Para la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia “CUT”, la perspectiva de género debe estar cada vez más presente en el accionar sindical de nuestras organizaciones, y en el trabajo cotidiano concebimos su importancia y sentido estratégico. Entre los desafíos para que el futuro sea socialmente más justo está la igualdad de género, un objetivo de hacer real la autonomía de las mujeres en todos los aspectos de la vida y, especialmente, en su vida laboral. Pese a los avances que las mujeres trabajadoras han logrado en el país, persisten entrabes y situaciones de discriminación y desigualdades que requieren medidas para su reversión ya que afectan a las mujeres e impide el goce de sus derechos en igualdad de oportunidades y que se reconozca la necesidad de una intervención que tome en cuenta las diferencias entre las mujeres desde la diversidad.

Con las mujeres se ha contribuido a la ampliación y recalificación de la democracia, manteniendo una lucha constante por el acceso a la tierra, el empleo y la defensa de la sobre vivencia familiar en contextos de insurgencia armada regional. A estas luchas se une la inclusión de la democracia, la defensa de la vida en situaciones de represión, y las luchas por otros derechos humanos como los derechos sexuales y reproductivos, las personas desaparecidas o secuestradas.

No se puede desconocer que las mujeres aportan al desarrollo del país y debe propenderse por la valoración y el reconocimiento de su contribución a la sociedad. En el ámbito laboral, no sólo participan realizado todo tipo de trabajo remunerado, sino que además se encargan del trabajo reproductivo y del cuidado, como madres y como mujeres cuidadoras de otros miembros de su familia e incluso de personas que no hacen parte de su núcleo familiar. A nivel comunitario trabajan por el desarrollo de su entorno, garantizando mejores condiciones de vida para su colectividad. En el mundo de lo político, participan en la construcción de agendas públicas en todos los ámbitos de preocupación de la realidad nacional y aportan decididamente a la construcción de la paz y a la recuperación del tejido social. Las mujeres colombianas se han destacado en todas las expresiones científicas, culturales y artísticas y en la construcción de escenarios que potencian el conocimiento; en el ámbito deportivo han alcanzado éxitos en todas las disciplinas, ejemplo de ello, han sido las medallas ganadas en los Juegos Olímpicos.

La política está dirigida a las mujeres colombianas de todos los grupos y sectores sociales sin distinción, tomando en cuenta sus diversidades, las particularidades que afectan a las mujeres de la población urbana y rural, pobres, afro colombiana, negra, raizal, palenquera, indígena, campesina y Rom, así como a las mujeres de diversas opciones sexuales y aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad (en situación de desplazamiento, de discapacidad y las víctimas de diversas formas de violencia basadas en género, entre otras).

La construcción del presente documento sobre política pública para las mujeres es, y ha sido ante todo producto del proceso de diálogo y consulta, de los análisis situacionales, de revisión y estudio de distintos documentos, de los compromisos internacionales y nacionales, de las situaciones que se buscan transformar y de las experiencias ejecutadas en el país en materia de políticas públicas para las mujeres, y con el propósito de alcanzar los logros formulados. Además, es un reconocimiento al aporte del movimiento social de mujeres, y en especial de las mujeres sindicalistas, en la reivindicación de derechos, buscando dar respuesta a las demandas de las numerosas expresiones organizadas de contar con una política pública para las mujeres de carácter nacional y de largo plazo que garantice cambios en las condiciones de vida de las mismas y que redunde en más desarrollo para el país. En particular, reconocer el aporte realizado por las organizaciones de mujeres que participaron en el proceso de construcción de este documento.

LA POLITICA PÚBLICA DE LA MUJER EN COLOMBIA

FUNDAMENTO DE LA AGENDA LABORAL DE LAS MUJERES EN LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT

¿Qué es la política pública Nacional de equidad de género para las Mujeres?



Es el querer del gobierno y expresa un conjunto de acciones, planes, programas, proyectos y presupuesto, para responder a necesidades e intereses, de hombres y mujeres. Es pública, porque es de interés general, pertenece a todos y es construida de manera concertada y en igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre (Op. Cit. En: http://latierrayelhombre. wordpress.com/2013/02/23/equidad-de-genero-en colombia/ consultado el 18 de agosto de 2013).

Antecedentes en Colombia

Las políticas públicas concretas para las mujeres se remontan hacia el año 1984, con la publicación de la Política para la Mujer Rural mediante el CONPES 2109, no obstante sólo hasta después de la promulgación de la Constitución de 1991 con su desarrollo sobre el principio de igualdad y no discriminación, y gracias al impacto de las conferencias mundiales sobre la mujer realizadas por Naciones Unidas, especialmente la de Beijing 1995, fue que se dio un impulso continuo a la elaboración de estas políticas incorporando la igualdad de oportunidades, la categoría de análisis de género y la búsqueda del empoderamiento de las mujeres.

El gobierno nacional cuenta con el ente rector de esta política que es, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, quienes han venido elaborando diferentes políticas para las mujeres, en 1992, se formuló la Política Integral para la Mujer; posteriormente, en 1994, la Política de Participación y Equidad y de la Mujer –EPAM–; en 1999, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujeres; y por último, en el año 2003, la Política Mujeres Constructoras de Paz; políticas, desde entonces, han estado lideradas por las entidades responsables del tema de equidad de género, que han contado con diferentes niveles de institucionalidad al interior de los gobiernos: Consejería para la Mujer, la Juventud y la Familia 1990-1994, Dirección de Equidad para la Mujer 1994-1998 y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 1998- 2010.

Durante los diversos procesos que se han dado, su implementación no ha sido de forma continua, pues, en materia de derechos de las mujeres, el país cuenta con un amplio compendio normativo, pero en la práctica no permiten su ejercicio real. Los contenidos de los distintos documentos de políticas que se han formulado, dan cuenta de las principales problemáticas que siguen afectando a las mujeres en Colombia, tales como dificultades para generación de ingresos y empleo decente, baja participación política, altos, niveles de violencias basadas en género, problemas para el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la educación, o demoras injustificadas en la protección de sus derechos al interior de las instancias competentes; incluso, las líneas de política y las acciones establecidas han sido similares y de otro lado no hay continuidad, por cuanto los cambio de gobierno o su continuidad hace que los intereses o temas sean otros de acuerdo al momento histórico, como el que se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, *“Todos por un nuevo país”*, cuyo principal interés es la Paz.



Estas políticas han estado alineadas a los compromisos internacionales suscritos por Colombia y a los planes de acción de las conferencias internacionales de Naciones Unidas sobre la mujer, que han sido el principal derrotero a nivel mundial para promover la igualdad para las mujeres y su incorporación plena al desarrollo.

En materia de implementación de estas políticas, se tienen dificultades, por un lado, limitaciones en conseguir presupuestos adecuados, ausencia de una estructura de poder decisoria adecuada y recursos humanos insuficientes; por otro lado, la existencia de inconvenientes para la transversalización a nivel sectorial y territorial de las políticas, así mismo la falta de un pacto social que comprometa a la sociedad en su conjunto en el cumplimiento de sus objetivos.

Vale la pena destacar que durante todos estos procesos de formulación de políticas públicas para la equidad de género, el movimiento social de mujeres ha tenido un rol activo, dado que han realizado acciones de incidencia y de control social, y es así, que la necesidad de contar con políticas públicas para las mujeres, se sustenta, en primer lugar, en el hecho de que éstas no son una minoría, sino, en efecto, son más de la mitad de la población, por lo que se requiere que todas las políticas, planes y programas que beneficien a toda la sociedad, además se necesita implementar acciones específicas para atender las necesidades e intereses particulares de la población femenina. En segundo lugar, es que, muchas de las desigualdades que enfrentan las mujeres tienen que ver con la división sexual del trabajo, la asignación de roles y estereotipos culturales, la separación del ámbito público y privado, y las negociaciones que se dan al interior del hogar. En tercer lugar, la afectación particular que adquieren en las mujeres determinados problemas sociales y que requieren una atención diferenciada. Por último, en que la carga inequitativa de las mujeres dificulta la movilidad social y el desarrollo del conjunto del país. Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes y los problemas en

los procesos de implementación, la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres busca contribuir y poner en marcha un proceso continuo de largo plazo con resultados medibles, mejorando la situación real de las mujeres colombianas y resolviendo las desigualdades de género.

¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo –PND?

Es un instrumento normativo y técnico, considerado la herramienta de planeación más poderosa del gobierno colombiano, que incluye los objetivos nacionales y sectoriales, las metas y las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que sirven de guía la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas en los cuatro años del periodo presidencial.

Línea de Tiempo del Plan nacional de Desarrollo

En Colombia, los últimos dos Planes han sido las hojas de ruta para el actual gobierno, que viene haciendo un esfuerzo expreso por cumplir con el mandato constitucional de la función administrativa diseñando estrategias de *Buen Gobierno*, como herramientas transversales para la consecución de los fines del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 *"Prosperidad para Todos"*; Igualmente, para 2014, el Plan de Desarrollo *"Todos por un Nuevo País"* 2014- 2018, continuó con algunas líneas de trabajo respecto de la hoja de ruta formuladas, en especial los temas referidos a la Mujer Colombiana.

La Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, encuentra su razón de ser en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 *"Prosperidad para todos"*, el cual consagra, la obligación de construir de manera participativa, bajo la coordinación de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM), una Política Nacional Integral de Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y Rrom. El desarrollo de estas políticas tiene planes específicos para garantizar los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En septiembre de 2012, el Gobierno Nacional, lanzó los lineamientos de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres y del Plan integral para garantizar una vida libre de violencias, constituyéndose en el referente para el diseño y puesta en marcha de acciones sostenibles para la superación de brechas y la transformación cultural, que, en la perspectiva de los próximos 10 años, contribuyan al goce efectivo de los derechos de las mujeres en nuestro país.

Con el contenido de principios, objetivos, ejes desarrollados en la política pública y los lineamientos, para la política pública de mujeres, se construyó el documento CONPES Social 161 de 2013 que presento la Política Pública Nacional de Equidad de Género y estableció el plan de acción indicativo para el período 2013-2016. Para la operativización de este Plan, se creó una Comisión Intersectorial mediante Decreto 1930 de 2013, que también adoptó dicha política. La Comisión es la máxima instancia rectora de la Política Nacional de Equidad de Género para las mujeres, y está integrada por los representantes de las distintas entidades interinstitucionales involucradas.



En la anterior política se planteó estrategias de intervención sectorial y multisectorial, de fortalecimiento institucional y de transformación cultural permitiendo en conjunto un desarrollo para la superación de las inequidades de género que afectan a las mujeres y en cierta medida dar respuesta en lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Se vislumbró, un plan específico para garantizar el derecho a una vida libre de violencias, articulándose con el conjunto de políticas públicas adelantados por el

Gobierno Nacional, dando cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: *"Todos por un nuevo país"*, se sustenta en tres pilares fundamentales: ***La paz, la equidad y la educación***, los cuales se articulan y desarrollan en cinco estrategias transversales (competitividad e infraestructura estratégicas; movilidad social; transformación del campo; seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz; y buen gobierno), seis estrategias territoriales (Caribe, Eje cafetero y Antioquia, Centro Oriente, Pacífico, Crecimiento y bienestar para los Llanos y Sur de Colombia) y una estrategia envolvente (crecimiento verde) que promueve la adopción de prácticas verdes en la generación de valor agregado por parte de los sectores económicos, donde el anhelo de todos los habitantes en contribuir en la construcción de una Colombia en paz, equitativa y educada, por cuanto una sociedad en paz puede concentrar sus esfuerzos en el cierre de brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema educativo, de otro lado una sociedad equitativa en donde todos los habitantes gozan de los mismos derechos y oportunidades permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones de formación en capital humano, así mismo, una sociedad educada cuenta con una fuerza laboral calificada, que recibe los retornos a la educación a través de oportunidades de generación de ingresos y de empleos de calidad, y cuenta con ciudadanos que resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia.



En su implementación, también se tuvo en cuenta una serie de elementos como la gestión y asignación de recursos, donde incluyo una serie de instrumentos novedosos armonizados con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015, que articula las dimensiones económica, social y ambiental para lograr un desarrollo sostenible.

¿Qué Contiene?

Marco Normativo del Plan Nacional de Desarrollo

Como podemos observar, *un* Buen Gobierno, es una meta y, por qué no, un principio fundamental de las actuaciones del Estado Colombiano para cumplir con las expectativas de sus ciudadanos. La estructura normativa de un Estado Social de Derecho como Colombia, exige que las leyes y acciones administrativas estén enmarcadas en los mandatos constitucionales. La Ley 152 de 1994 determina que, una vez inicia su periodo constitucional, el Presidente cuenta con seis meses para presentar ante el Congreso de la República su plan de gobierno denominado "*Plan Nacional de Desarrollo – PND"*.

La directriz sobre la cual fue construida la Política Pública responde al artículo 177 de la Ley 1450 de 2011, y en su Parágrafo del citado artículo señala que: *"La política pública asegurará el cumplimiento del Estado Colombiano de los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres con un enfoque multisectorial y transversal"*.

En lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, aprobado por la Ley 1753 de 2015, y que fue fruto de las propuestas construidas por las Consejeras Nacionales de Planeación sector Mujer, el Movimiento de Mujeres y Mujeres Rurales, contempla los artículos 67, 107, 129 y 232 de manera específica para las Mujeres, así:

- Transferencia de Recursos del Sistema General de Salud a las entidades territoriales para las Medidas de Atención para mujeres víctimas de violencias. (Artículo 67).
- Creación de la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura. (Artículo 107).

- Presencia de una congresista de la Comisión de la Mujer en la Comisión de Seguimiento a las Facultades Extraordinarias otorgadas al gobierno para reforma el sector rural. (Artículo 107).
- Evaluación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y de la Política Pública para Mujeres Víctimas del conflicto armado. Con el fin de ajustarla con metas y acciones para este cuatrienio, con un mecanismo formal de seguimiento por las organizaciones de mujeres y armonización territorial. (Artículo 129).
- Presupuesto y planeación con enfoque de Género. Diseño de un mecanismo que permita a las entidades del Gobierno Nacional incluir el enfoque diferencial de género en sus procesos de planeación y presupuesto. (Artículo 129).
- Formulación participativa de la Política Pública Integral de Mujer Rural con enfoque étnico, etario y territorial. (Artículo 232).

Principios de la Política Pública Nacional de Equidad de Género



Se hallan inmersos en los principios constitucionales, en los pactos y convenios que ha aprobado el Estado Colombiano y en diversas normativas nacionales, y busca, desde un marco de sostenibilidad, garantizar los derechos de las mujeres; principios que se enuncian:

Autonomía y empoderamiento: Reconoce las capacidades y la libertad de las mujeres frente a sus derechos individuales para definir y actuar en consonancia con sus proyectos personales y colectivos de vida y de organización social.

Interculturalidad: La Política reconoce y valora que Colombia es una nación multiétnica y pluricultural en la que coexisten y convive la diversidad étnica, regional y cultural. Reconocimiento de la diversidad y de las diferencias desde un enfoque de derechos.
Participación: Reconoce a las mujeres como actoras sociales y políticas, interlocutoras y sujetos de derechos, como condición para el ejercicio pleno de su ciudadanía.

Solidaridad: El Gobierno Nacional promoverá que la sociedad, en un compromiso conjunto, privilegie e incluya en los beneficios de desarrollo desde un enfoque de derechos a todas las mujeres desde su diversidad y diferencias, y realice los esfuerzos necesarios para el fortalecimiento de sus capacidades y el ejercicio pleno de sus derechos como sujeto social.
Corresponsabilidad: La política debe lograr el compromiso, la complementariedad, la subsidiariedad y la concurrencia de todos los sectores sociales con la igualdad de género.

Sostenibilidad: La Política requiere que el Estado garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y humanos necesarios para su implementación.

Los principios referidos anteriormente son considerados fundamentales para la generación de empleo, el impulso del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, y particularmente en el sector minero-energético, las mujeres tradicionalmente no han tenido una alta participación laboral. Así mismo, es necesario tomar medidas para evitar posibles riesgos en la vida y la seguridad de las mujeres. Entre los riesgos se encuentra que un importante sector de mujeres rurales dedicadas a actividades agrícolas y de pastoreo pierda sus trabajos y no se les permita una inserción laboral adecuada. Además, debe considerarse la afectación medio ambiental y su impacto diferenciado, así como la necesidad de prevenir las violencias basadas en género, los embarazos no deseados, y la estigmatización de la prostitución, entre otras, que suelen aumentar en zonas de mayor concentración de población masculina como son las áreas de extracción minera y energética.

Lineamientos

La Política pública se basa en los siguientes lineamientos

1. Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y la eliminación de barreras para posibilitar la plena participación de las mujeres en el mercado laboral tomando en cuenta diversidad urbano/rural y étnica.
2. Conciliación de responsabilidades laborales con obligaciones familiares al interior de la familia.
3. Prevención, protección, atención y reparación de los impactos diferenciados del conflicto armado y el desplazamiento forzado en la vida de las mujeres desplazadas o en riesgo de serlo y con el Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias
4. Fortalecimiento a las iniciativas de construcción de paz y convivencia ciudadana.
5. Generación de capacidades en las mujeres para participar en política, en espacios sociales con liderazgo y en espacios de toma de decisión.
6. Respuesta integral y oportuna, a través del SGSSS, para la realización de acciones de promoción y prevención, atención primaria en salud, y en salud sexual y reproductiva para las mujeres.
7. Reducción de barreras para el acceso y la permanencia de las mujeres en los sistemas educativos tomando en cuenta el enfoque diferencial y territorial.
8. Fortalecimiento de la incorporación del enfoque diferencial de género en los lineamientos curriculares para una mayor pertinencia de la oferta educativa para las mujeres desde su diversidad.
9. Educación flexible, pertinente y de calidad para jóvenes y adultas con pertinencia cultural que contribuya a la construcción y desarrollo de sus proyectos de vida: Fomento del deporte y recreación con enfoque diferencial, y del uso creativo del tiempo libre y los estilos de vida saludables.
10. Fomento del acceso y uso a la propiedad y recursos productivos para las mujeres desde su diversidad.
11. Atención y protección de las mujeres desde su diversidad frente a factores de riesgo y/o vulnerabilidad ocasionados en su entorno (hábitat y ambiente).
12. Fortalecimiento de procesos que contribuyan a la transformación cultural a favor de la no discriminación.
13. Fortalecimiento a la gestión del conocimiento.
14. Fortalecimiento de la institucionalidad.

Ejes articuladores de la Política

El documento se articula en los siguientes ejes:

- Autonomía económica e igualdad en la esfera laboral y del cuidado
- Construcción de paz
- Participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder
- Salud integral y derechos sexuales y reproductivos
- Educación de calidad con enfoque diferencial y acceso de las mujeres a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Territorio, hábitat y medio ambiente
- Gestión pública, desarrollo institucional, y transformación cultural y comunicación como ejes transversales de la Política.
- Los lineamientos del Plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Objetivos Generales de la Política Pública para la Mujer:

Asegurar el pleno goce de los derechos de las mujeres colombianas garantizando el principio de igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta las particularidades urbana y rural, afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, indígena, campesina, Rrom, así como a las mujeres de diversas opciones sexuales y a aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres en situación de desplazamiento, discapacidad, las mujeres cabeza de familia, las madres gestantes y las víctimas de diversas formas de violencia basadas en género.

En el largo plazo, se espera que las mujeres en Colombia ejerzan sus derechos y responsabilidades en igualdad con los hombres, fortalezcan su ciudadanía desde las diferencias y diversidades, desarrollen sus capacidades en libertad y autonomía, actúen como sujetos sociales activos frente a su proyecto de vida y continúen contribuyendo al desarrollo del país con reconocimiento social.

Objetivos Específicos:

1. Transversal izar el enfoque de género en las políticas y en el accionar del gobierno nacional a nivel sectorial y territorial.
2. Desarrollar una estrategia que garantice a las mujeres el acceso a las oportunidades y a los bienes y servicios que brinda el Estado.
3. Garantizar un enfoque diferencial de derechos en las políticas y en el accionar del gobierno nacional a nivel sectorial y territorial que permita el reconocimiento

de las diferencias y diversidades de las mujeres, particularmente afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, indígena, campesina y rom, así como la intersección de múltiples formas de discriminación y los efectos desproporcionados que ciertas prácticas y problemáticas sociales tienen sobre las mujeres.

4. Determinar la factibilidad de un plan de cuidado que permita que las mujeres ingresen y permanezcan por elección en el ámbito público, y que paralelamente equilibre sus responsabilidades en el ámbito privado.
5. Avanzar en la transformación cultural con la superación de los imaginarios sociales, creencias y prácticas que refuerzan la discriminación y condiciones de inequidad hacia las mujeres.
6. Fortalecer la institucionalidad para contar con recursos financieros, técnicos y humanos transversalidad del enfoque de género significa que en el diseño e implementación de las políticas, planes y programas sectoriales y territoriales se consideren el efecto diferenciado que tienen las acciones que se realizan y los impactos esperados sobre hombres y mujeres.
7. La transversalización debe estar presente desde la planeación y formulación de proyectos, programas y/o políticas hasta en las formas de valoración de su efectividad en los procesos de monitoreo y evaluación.
8. Desarrollar un Plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.
9. Desarrollar un Plan integral para la prevención y atención del impacto desproporcionado y diferencial del desplazamiento sobre las mujeres.

Estrategias

1. Plena participación de las mujeres en el mercado laboral con igualdad de oportunidades
2. Conciliación de la vida familiar y laboral.
3. Protección de los derechos de las mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado y otras violencias contras las mujeres en el marco del conflicto armado.
4. Reconocimiento y fortalecimiento de las mujeres y sus diferentes formas organizativas en la construcción de la paz
5. Garantías a las mujeres en todo su ciclo vital del enfoque diferencial en el sistema de salud y en los derechos sexuales y reproductivos

6. Fomento a la participación de las mujeres en instancias de poder y toma de decisiones Incorporación del enfoque diferencial y regional en los análisis de las políticas y programas de desarrollo económico del Gobierno Nacional.
7. Promoción y fortalecimiento del acceso a la propiedad y a los recursos productivos.
8. Movilización y comunicación para la transformación cultural
9. Disminución de los factores de riesgo y/o vulnerabilidad de las mujeres frente a hábitat y ambiente.
10. Fortalecimiento institucional.

Leyes en favor de las mujeres

Nivel Nacional

La Constitución Política de Colombia en su artículo 43, establece que, *"la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación"*, y en su artículo 13 señala que, *"el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados"*. Además, en su artículo 7, *"reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana"*.

NORMATIVA NACIONAL[1]	
1	Ley 22 de 1981, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
2	Ley 51 de 1981, que ratifica la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
3	Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política y sus decretos reglamentarios (reconocimientos Comunidades negras como grupo étnico y el derecho a la propiedad colectiva.
4	Ley 82 de 1993, por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familiar.
5	Ley 248 de 1995, que ratifica la Convención Interamericana de Belém Do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
6	Ley 294 de 1996, que sancionó como delitos autónomos las conductas violentas producidas en el seno de la familia y creó mecanismos de protección especial para el sujeto agredido en el marco del conflicto familiar.
7	Ley 360 de 1997, por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro II del Decreto-ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan otras disposiciones.

[1] http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Paginas/Leyes-Favorables-Mujeres.aspx; http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Paginas/leyes-2015.aspx

8	Ley 575 de 2000 (modificó la ley 294 de 1996), que busca dotar de herramientas legales a las Comisarías de Familia para que puedan proceder de manera inmediata ante un hecho de violencia intrafamiliar y dictar medidas de protección definitivas.
9	Ley 581 de 2000, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. (Ley de Cuotas).
10	Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
11	Ley 679 de 2001**,** por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.
12	Ley 742 del 2002, por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
13	Ley 731, 14 de enero de 2002, la presente ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.
14	Ley 800 de 2003, por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
15	Ley 823, 11 de julio de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres.
16	Ley 882, 2 de junio de 2004, Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000.
17	Ley 906 de 2004, Código de procedimiento Penal Colombia Sistema Penal Acusatorio. Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma.
18	Ley 1009, de 2006, por la cual se crea con carácter permanente el observatorio de asuntos de género.
19	Ley 1336 de 2007, por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.
20	Ley 1142, 28 de junio de 2007, por medio del cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.
21	Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.
22	Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman el Código de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996, y se dictan otras disposiciones, junto con sus decretos reglamentarios.
23	Decreto 164, 25 de enero de 2010, por el cual se crea una Comisión Intersectorial denominada "Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres"
24	Ley 1413 de 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.
25	Ley 1448 de 2011, por la cual se dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, y por medio de la cual se establecen normas específicas para las mujeres en los artículos del 114 al 118. Así como el Decretos 4635 de 2011 para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras;

	4634 de 2011 para el pueblo Gitano o Rrom; y 4633 de 2011 para pueblos y comunidades indígenas.
26	Ley 1496 de 2011, por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones.
27	Ley 1468, 30 de junio de 2011, por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
28	Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Ley que ha permitido las cuotas en la conformación de listas a cargos de elección popular.
29	Ley 1542 de 2012. Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Esta ley tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querrellable y desistible de los delitos de violencia intrafamiliar en asistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal.
30	Decreto 1930 de 2013, por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea una Comisión Intersectorial para su implementación.
31	Ley 1639 del 2 de julio de 2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.
32	Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely).
33	Ley 1768 de 2016, por medio del cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional, de pago de prima de servicios para los trabajadores y las trabajadoras domésticos.
34	Ley 1822 de 2017, por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones.

Nivel Internacional

Colombiano, ha ratificado importantes instrumentos a favor de los derechos de las mujeres. Particularmente, hay que mencionar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW”, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El Convenio de CEDAW, obliga a los Estados partes a tomar medidas concretas para enfrentar la discriminación, expresada en leyes y políticas públicas, que permitan no sólo la garantía de los derechos sino también el ejercicio real de éstos. Así mismo, dicha Convención impulsa la aplicación de acciones afirmativas, entendidas como medidas especiales de carácter temporal que se aplican para superar una desigualdad y, una vez cumplido su fin, desaparecen.

Anuado a lo anterior, la Corte Constitucional, en Sentencia C-371 de 2000, ha manifestado que las acciones afirmativas deben comprenderse como las medidas gubernamentales adoptadas para aminorar los efectos negativos de las prácticas sociales que tradicionalmente han ubicado a personas o grupos en situaciones de inferioridad y desventaja. Estas medidas parten de reconocer el principio que establece que a situaciones desiguales deben aplicarse medidas correctivas que "favorezcan" a las personas discriminadas.

La H. Corte Constitucional, en varias sentencias se ha referido al carácter obligatorio que tienen las recomendaciones emanadas por los comités de los tratados internacionales suscritos por Colombia. Particularmente, en la formulación de esta política, se tuvieron en cuenta aquellos conexos con los derechos de las mujeres y, en especial, las presentadas por el Comité de la CEDAW, la incorporación de las Metas del Milenio de 2000 y el Consenso de Brasilia de 20110. Así mismo se consideran las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de Mujeres, Paz y Seguridad, como las Resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889. Por otra parte, diversas conferencias internacionales del sistema de Naciones Unidas han generado planes de acción para incorporar la perspectiva de género y los derechos de las mujeres en la gestión del desarrollo como apuesta para superar la pobreza, alcanzar la equidad y garantizar la integralidad de los derechos humanos.

Así mismo, tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los cuales es miembro el Estado Colombiano, se han ocupado desde sus inicios de la igualdad entre los géneros y de los derechos de la mujer. En la actualidad, existen importantes desarrollos en materia del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, que se hacen tangibles en una serie de tratados, convenciones, recomendaciones, resoluciones y conferencias, entre otros, que reconocen la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Se destaca que, a partir de la Conferencia de México de 1975, se contribuyó a mejorar la situación de la mujer y su acceso a los recursos, no fue posible cambiar la estructura básica de la desigualdad en las relaciones entre el hombre y la mujer. Solo hasta Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, se habló verdaderamente del inicio de un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad entre los géneros. Antes de esta conferencia, en algunos casos, y posteriormente, en otros, las Naciones Unidas aprobaron los principales instrumentos internacionales en derechos humanos, entre los cuales se pueden mencionar:

NORMATIVA INTERNACIONAL[2]	
1	Objetivos de desarrollo del Milenio. Compromiso de los 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas para el año 2015. (www.un.org/millenniumgoals).
2	Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Resolución 1325 de 2000. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213ª, celebrada el 31 de octubre de 2000.
3	Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999 y abierta a la firma el 10 de diciembre de 1999.
4	Cuarta Conferencia Mundial Sobre La Mujer, Beijing-. Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995.
5	Convención de Belem Do Para. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil.
6	Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
7	Protocolo de San Salvador. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
8	Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.
9	Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969.
10	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
11	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
12	Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966.
13	Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

En la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia "CUT", se desarrolla e implementa el anterior marco normativo exigiendo el nivel de la igualdad en el mundo del trabajo, la participación en los espacios de decisión y liderazgo, en el mundo sindical, participación

[2] http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Paginas/Leyes-Favorables-Mujeres.aspx; http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Paginas/leyes-2015.aspx

de las mujeres trabajadoras en la mesas de negociación colectiva, de reparación con enfoque diferencial de género, en la formación y capacitación de la mujer trabajadora para la defensa sus derechos, ejercicio de la libertad sindical y de asociación y en la aplicación de la política de género.

Es así como desde el Departamento de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia "CUT", ha aplicado esta normatividad, articulada en la política pública de Colombia, teniendo en cuenta los siguientes análisis sobre: **Situación Actual de las Mujeres en Colombia**, desde el nivel laboral, económico, social y político, donde los indicadores de cada tema muestran todavía la persistencia de graves discriminaciones que influyen negativamente sobre el desarrollo pleno de las mujeres y que se reflejan, entre otras cosas, en altos índices de violencia basada en género –VBG–, serias desigualdades en el mercado laboral y baja participación en los cargos de poder y de toma de decisiones.

El Departamento a través de su Agenda, ha levantado cifras y datos significativos para la investigación de las condiciones laborales, la defensa de sus derechos, la violencia antisindical con enfoque de género y las cifras de articulación a la negociación y reparación colectiva con enfoque de género en el mundo sindical, haciendo seguimiento a la participación de las mujeres para defender sus derechos.

La Agenda para la Paz, da cuenta de la participación de las mujeres trabajadoras, en la construcción de la paz en este país. Planteamos también en la agenda laboral de las mujeres, las principales temáticas que afectan el goce de los derechos de las mujeres trabajadoras en Colombia y que impiden u obstaculizan su capacidad para generar autonomía, así como su plena participación en la toma de decisiones sobre su vida y la de su colectividad. Adicional a esto, los estímulos de la actividad económica, la variación en los ingresos familiares y los ciclos económicos han fortalecido el aumento de la oferta laboral femenina, sin embargo, ese aumento de la participación de las mujeres en el trabajo productivo, el cual no ha sido acompañado de una mayor presencia de hombres participando del trabajo reproductivo, las mujeres mayoritariamente continúan a cargo de él y este sigue siendo invisibilizado. Este indicador refleja la participación sobre el mercado laboral, de otro lado las mujeres que obtienen un ingreso tienen menor probabilidad de enfrentar una situación de pobreza.

Además de la capacidad de generar ingresos propios, resulta de suma importancia que las mujeres reciban igual salario por igual trabajo, sin embargo, la brecha bruta de

ingresos laborales entre hombres y mujeres, no se reduce, existen otros aspectos que estarían determinando la desventaja salarial femenina, como la posición ocupacional y las ramas de actividad en las cuales se desempeñan, debido a que las mujeres se ocupan mayoritariamente como trabajadoras por cuenta propia (43% del total de ocupadas en el trimestre móvil septiembre-noviembre 2011), en los sectores de servicios, comunales, sociales y personales (32%) y comercio, hoteles y restaurantes (31%). No obstante, estas estadísticas disponibles no permiten observar la diversidad de formas productivas acordes a cada grupo étnico, se observa una actividad muy importante para la movilidad social de los hogares, que es el cuidado de niños.

El desconocimiento y subregistro de los hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado ha dificultado el reconocimiento de la problemática. Como señala la Corte Constitucional, *"lo que resulta más grave es que sobre este tipo de violencia se desarrolla un triple proceso de invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de las víctimas, e impunidad de los perpetradores".*

Entre los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los espacios de decisión, uno de gran relevancia, es el tener que cumplir con responsabilidades paralelas a la de su ejercicio político como lo son el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos/as y de otras personas. Es decir, la garantía de los derechos políticos de las mujeres no ha estado acompañada por un replanteamiento de la división sexual del trabajo ni de la jerarquía de los roles de género en la familia. Las mujeres, a pesar de los avances en el reconocimiento de sus derechos, continúan a cargo de la reproducción y el cuidado de los hijos/as, del trabajo doméstico y las tareas peor, es decir, si bien el mecanismo de cuotas ha mostrado su efectividad en un aumento de la participación de las mujeres en la última década en América Latina, dicho aumento no sólo no ha sido sostenido, sino que, en algunos casos, el mínimo exigido se ha convertido en un punto de llegada. En Colombia, la participación en política de las mujeres ha registrado un ligero aumento en cifras en la última década.

Otros temas que las mujeres trabajadoras analizaron para generar estrategias que se puedan incluir dentro de la política pública son: Salud integral y derechos sexuales y reproductivos. Para alcanzar este objetivo se debe propender a que la prestación de servicios de salud incorpore en todo su diseño e implementación la transversalización del enfoque de género y la integralidad del concepto de salud. También es necesario hacer mención en lo que tiene que ver con la disminución de las barreras que encuen-

tran las mujeres en el sistema de salud para acceder de manera oportuna a la interrupción del embarazo en los casos que contempla la Sentencia C -355/2006[3], así mismo es de gran importancia el análisis de la conducta reproductiva de las adolescentes, no sólo por su relación con embarazos no deseados y abortos, sino por sus implicaciones sociales, económicas y de salud.

En relación con el acceso de las mujeres a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el país registra unas brechas por género en el uso de las principales tecnologías que, si bien no son abismales, sí son significativas en términos de la apropiación que las mujeres pueden hacer de estas herramientas y de los efectos que ello puede tener sobre el bienestar de las mujeres en relación con el resto de la población, situación que está más marcada en las zonas rurales.

Es relevante para las mujeres trabajadoras, hacer mención a la seguridad ciudadana y particularmente a la necesidad de incorporar en el concepto y análisis, las violencias contra las mujeres dadas tanto en el ámbito privado como público, así como la evidencia de que en situaciones de conflicto armado estas violencias se profundizan. Desde esta perspectiva, la seguridad debe incorporar en sus estrategias los derechos de las mujeres y no puede limitarse a un abordaje de seguridad restringido a los espacios públicos, pues requiere abordar en su comprensión los espacios privados en donde se ejercen la mayoría de las violencias contra las mujeres.

Trabajar en la transformación cultural de los imaginarios y demás elementos de la cultura que han colocado a las mujeres en una situación de desventaja es significativo dentro de la Política. Así mismo, es necesario reconocer la riqueza cultural tangible e intangible que tenemos como nación, en donde la diversidad de mujeres juega un papel fundamental en el aporte a la riqueza de sus comunidades y desarrollo del país, y en escala de importancia también se reconoce el acceso y disfrute que tienen las mujeres a la cultura, a la recreación, a las nuevas tecnologías y a la gestión del conocimiento, por ende, estos aspectos deben ser considerados en la Política.

---

[3] *Se declarará por lo tanto ajustado a la Constitución el artículo 122 del Código Penal en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; b) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.*

COMENTARIOS A LA POLITICA PÚBLICA

Por: Ligia Inés Álzate Arias

Directora del Departamento de la Juventud

Recientemente en Colombia se generaron dos documentos marcos que constituirán una hoja de ruta del propósito que permite integrar socialmente a la mujer en el desarrollo del país desde distintos sectores.

Se trata de los lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (LPPNEGM) y los Lineamientos del Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencias 2012-2022 (LPIGVLV), que articulan la política sobre mujer y género, en su empoderamiento socioeconómico, presentando elementos que fijan un firme compromiso sobre la erradicación de causas que admiten la deserción de la cuota femenina sobre todos los entornos públicos y sociales. Son los lineamientos que corresponden al enfoque con el que se respondió a la necesidad de incorporar a las mujeres al trabajo productivo y a la participación social, bajo el supuesto de que ellas constituían un recurso subutilizado y dinamizador de la economía.

En este sentido, la Política Pública para la Equidad de Género (LPPNEGM y LPIGVLV) adquiere gran trascendencia, puesto que significa que el país está comenzando a reconocer la deuda acumulada con la pluralidad de mujeres que constituyen más de la mitad de su población: negras, indígenas, mestizas, urbanas, rurales, desplazadas, jefas de hogar y, especialmente, con aquellas en situaciones de vulnerabilidad social. Este reconocimiento ya no es más un gesto que apoya de forma aislada acciones puntuales en favor de ellas; es más bien un proceso que se institucionaliza con el respaldo gubernamental, que asume la tarea de transformación cultural, como resultado del cambio en la concepción de las políticas públicas para las mujeres.

La política pretende disminuir, aunque algunos consideran que erradicar, la brecha consistente entre el reconocimiento de derechos y el ejercicio de estos para la mayoría de las mujeres en Colombia, con especial atención a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. Es por ello que con los lineamientos de la política pública se busca implementar un conjunto de acciones estratégicas que permitan avanzar en la superación de la discriminación, garantizando el ejercicio de los derechos de las mujeres y con ello beneficiando a toda la comunidad colombiana en pro de una sociedad más equitativa e incluyente.

La segregación sistemática contra la mujer en Colombia es el principal flagelo que ha desacreditado los principios del desarrollo en la realización social de esta, e interrumpe su proceso de transformación social en el escenario público, pues no solo hace de ella la víctima principal de una pobreza en expansión, sino también suscita actitudes malsanas en el hombre[2]. La falta de oportunidades y la violencia contra las mujeres se marcan como la principal causa que ha truncado su empoderamiento en el desarrollo socio-innovador a escala mundial.

La política decreta la *"promoción de las mujeres en los procesos de planeación, avances en relación con la competitividad laboral, apoyo a la formulación de desarrollos normativos, la promoción de la participación política y ciudadana, la organización y movilización de las mujeres por la paz y la consecución de apoyo por parte de organismos de Cooperación Internacional",* para el impulso de la equidad y la participación.

Los lineamientos introdujeron cambios positivos expresados en acciones de formación y capacitación en perspectiva de género y derechos de las mujeres, que inciden en la nueva dinámica que toma la organización de las mujeres mediante la conformación de asociaciones municipales o regionales, lo cual no solo les permite hacerse visibles, sino también legitimar sus demandas y mejorar las condiciones para ejercer su liderazgo e interlocución, estableciendo relaciones más horizontales frente a las instituciones gubernamentales.

Si bien es cierto que las situaciones de transformación social que introduce esta política, pueden asumirse como un logro institucional, es claro que este proceso no se ha dado de manera uniforme, es decir, su cobertura y resultados son diferenciales, lo cual tiene que ver no solo con limitaciones de tipo institucional, sino con antecedentes de participación comunitaria y liderazgo tradicional de las mujeres, en los cuales no se han

Como obstáculo en el desarrollo del ejercicio de los derechos de la mujer se encuentra la falta de continuidad en las acciones de capacitación, formación y acompañamiento institucional para fortalecer los procesos organizativos, lo cual tiene que ver básicamente con cambios de gobierno, que a su vez implican cambios en la concepción y orientación de los enfoques sobre el logro de integración de las mujeres a los procesos de desarrollo y participación política. Todo ello refleja en una débil apropiación institucional de las políticas públicas dirigidas al logro de la equidad entre hombres y mujeres[6]. Por ello se debe generar consciencia en el ámbito académico, económico, político y cultural para el cumplimiento de los fines y objetivos de la política.

Así mismo se observa que en el PND 2014-2018, *"Todos por un nuevo país"*, se desaprovecha la oportunidad de considerar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como un elemento central de la apuesta por la equidad y la paz, dos de los tres principios en los que se fundamenta el Plan, y que en su análisis desconocen los retos de equidad e igualdad de género como un asunto sustancial para el desarrollo del país, y de la incorporación de las mujeres y sus derechos como elemento central de la construcción de paz en Colombia.

Otro aspecto importante es que solo se contemplaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura del sector agrario dentro de las cuales se incluyó la creación de la Dirección de Mujer Rural, esto sería una herramienta para fortalecer la Institucionalidad para el adelanto de la Mujer, pero que por directriz de austeridad del gobierno, no se crearán más Ministerios o Instituciones.

Es preciso trabajar los temas de la política pública para la equidad de género (LPPNEGM y LPIGVLV) en una dimensión transversal del desarrollo, que atraviese y se haga presente en toda la estructura gubernamental, en estrategias y políticas locales, departamentales y regionales. Se debe entender que la equidad de género no puede ser asimilada a un simple componente, pues llevaría a soluciones aisladas y respuestas inmediatistas a través de acciones no transformadoras ni de mayor impacto sobre la situación actual.

En conclusión, la política requiere la construcción de una voluntad social para emprender o continuar el proceso de inserción de la perspectiva de género en todas las instituciones, para lo cual es imprescindible el compromiso de los/as gobernantes, de los niveles directivos y administrativos y de los/as operadores/as jurídico/as y de las demás fuerzas sociales, en especial de la academia, en este gran proceso. La política